

An informative bulletin by the **Just Governance Group** | Un boletín informativo del **Grupo de Gobernanza y Justicia**

Dispatches

BOLIVIA COLOMBIA GUATEMALA PALESTINE PERU TURKEY



Carmen Beatriz Ruiz

BOLIVIA

Corrupción en la gestión pública, un mal endémico en Bolivia

En Bolivia, la población es víctima de un bombardeo, literalmente, de información sobre hechos endémicos de corrupción en la gestión pública. Los medios de comunicación dan cuenta de redes mafiosas que operan dentro del sistema de justicia, involucrando a jueces y fiscales, a autoridades de gobierno y municipales y a la repartición denominada Derechos Reales, encargada de registrar, ordenar y garantizar las condiciones del derecho de propiedad de las viviendas, terrenos y construcciones de las áreas urbanas. Todo el personal acaba de ser cambiado.

Estas denuncias y procesos de investigación involucran también a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Dos de los casos más recientes están vinculados, por un lado, con maniobras para influir en las decisiones de la justicia, desde el amedrentamiento hasta el prevaricato. Hay un promedio de tres denuncias por semana. Por otro lado, con la protección y encubrimiento en actividades de narcotráfico. Hasta el momento hay dos centenares de efectivos involucrados.

Las denuncias de corrupción provienen principalmente de personas afectadas, investigación de los medios de comunicación y filtraciones internas, producto de los conflictos de poder en las propias instituciones.

Nada pueden contra esta corriente los programas de transparencia creados por el gobierno salvo que en los casos que investigan estuvieran involucrados personajes de la oposición política, ni los compromisos del Estado boliviano al suscribir Convenciones del área ni las recomendaciones de instancias internacionales presentes en el país.

La corrupción corre en la gestión pública como una mancha de aceite que ensucia cuanto toca. No solamente es un tema para las agendas informativas, también aparece en los discursos electorales de la campaña a elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.

Pero, en verdad, ¿qué se puede hacer?...



COLOMBIA

Fortalecimiento de la institucionalidad de género en el Nuevo Plan de Desarrollo colombiano

Uno de los principales obstáculos para el avance de la agenda del movimiento de mujeres en Colombia ha sido la debilidad institucional existente: insuficiente capacidad de los mecanismos de género y una transversalización incipiente en la administración pública en todos los niveles. Pese a ello, los [lineamientos de la política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres](#) concertada con

una amplia diversidad de mujeres en todo el territorio nacional el año 2012, y el Documento del Consejo Nacional de Planeación 161 de 2013 que viabilizó estos lineamientos lograron un primer avance en este sentido al disponer que todas las entidades del orden nacional deberían incorporar el enfoque de género en sus procesos de planeación y de presupuesto anualmente, entre otras medidas.

Pero hay más avances. Entre ellos el recientemente aprobado [Plan Nacional de Desarrollo, que contiene un "Pacto por la Equidad de las Mujeres"](#), el cual refleja la lucha del movimiento por un avance institucional acorde con la necesidad de cerrar las principales brechas de género. El progreso resulta significativo si se tienen en cuenta varios aspectos: i. La creación de un Sistema Nacional de Mujeres, compuesto por entidades e instancias estatales, organizaciones internacionales y organizaciones de mujeres, encargado de incluir en la agenda de las diferentes ramas del poder público los temas prioritarios de la agenda de equidad, particularmente, la transversalización de la igualdad de género. ii. El fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Igualdad de Género, que representa una de las principales causas de la debilidad institucional actual. iii. La creación de Grupos de Género en todas las instancias de nivel nacional provistas con personal experto y encargadas de garantizar la transversalidad a nivel sectorial. Estos Grupos en las entidades nacionales deberán reportar sus avances ante el Sistema Nacional de Mujeres.

Hay varios reparos y debates que se plantean ante el Pacto por la Equidad de las Mujeres, por considerar insuficientes tanto su reflejo de las prioridades de la agenda de igualdad de género como su base presupuestal. Sin embargo, la puesta en marcha de estas disposiciones representa una oportunidad importante para demandar acciones del Estado más decididas y técnicamente sustentadas.

GUATEMALA

El derecho a elegir y ser electo en Guatemala

En el año 1985 Guatemala recuperó formalmente su retorno a la democracia como régimen político, con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente y la posterior promulgación de la Constitución Política de la República. El nuevo régimen, presidido por Oscar Humberto Mejía Víctores, devolvió a los guatemaltecos la certeza del ejercicio del derecho a participar en el gobierno de manera directa o por medio de representantes libremente electos, como lo señalan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos / Pacto de San José.

Sin embargo, el brillo del ejercicio democrático fue palideciendo con el paso del tiempo. Desde 1985 y cada cuatro años los guatemaltecos mayores de 18 años han sido convocados para elegir, entre los candidatos propuestos por el sistema de partidos políticos, al presidente y vicepresidente de la República, los diputados al Congreso y los miembros de las Corporaciones Municipales. Los resultados de esa elección, una y otra vez, favorecieron a personas que solo excepcionalmente tuvieron un desempeño y un perfil acorde con la expectativa del bien común por la que fueron electos.

Este 2019, cuando por décima vez el Tribunal Supremo Electoral convocó a participar en las elecciones generales que se realizarán en la tercera semana del mes de junio (16/06/2019) el sistema de partidos políticos evidenció con claridad las muchas debilidades que le han impedido estar a la altura de lo esperado.

El funcionamiento de los partidos como clubes electorales, la falta de idoneidad de los candidatos asociada con corrupción y otros delitos (algunos muy graves), el nepotismo, el financiamiento electoral ilícito, la venta de las candidaturas y otros vicios hacen que la oferta electoral sea poco confiable y el derecho de elegir y ser electo apenas una formalidad que compite con el desanimo de acudir a la elección.

34 años después de promulgada la Constitución Política, los guatemaltecos siguen frente al desafío de recuperar el rumbo democrático.



Otto Valle

diariodispatch.com



Murad Fares

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Restricting Movement

Restricting movement is one of the main tools that Israel employs to enforce its regime of occupation over Palestinians in the Occupied Territories. Israel restricts the movement of Palestinians between the West Bank and the Gaza Strip, into Israel, and abroad. Only Palestinians are restricted in this manner, while settlers and other civilians – Israeli and foreign – are free to travel at will.

Palestinians' freedom of movement is completely at the mercy of the state's whim, the instructions given to soldiers at the local District Coordination Office and the way in which these are implemented. This state of affairs forces Palestinians to live in constant uncertainty, making it difficult to perform simple tasks and make plans. A Palestinian leaving home in the morning cannot be certain whether he or she is going to make it to work (on time or at all) or keep a medical appointment, visit family or catch a movie. She might make it, or she might be delayed at a checkpoint for hours, detained and harassed by soldiers. She may have to turn around and go back the way she came. Or she may be arrested.

The restrictions on movement and the uncertainty it generates have implications for the Palestinian economy and its development potential. In several reports on the issue, the World Bank found that these restrictions are a major factor impeding economic stability and growth in the Occupied Territories. Reasons include delays in the arrival of goods, non-arrival of raw materials, the separation between the West Bank and the Gaza Strip, and the inability to set schedules and meet them.



Carlos Herz

PERÚ

La corrupción y el debilitamiento de la gobernabilidad en Perú

En Perú, la gobernanza, definida como la capacidad y el ejercicio de hacer buen gobierno con la concurrencia de diversos actores sociales y económicos, ha sido seriamente afectada por la corrupción que correo las estructuras más importantes de las instituciones del gobierno, la política, la economía y la sociedad.

Aunque el discurso parece retórico expresa una lacerante realidad, cuyas cifras son elocuentes. Según la Defensoría del Pueblo, el año 2018 el "costo de la corrupción" en Perú significó 10% del presupuesto público anual, monto que debería estar destinado a atender las necesidades de salud, infraestructura, gastos administrativos, seguridad y educación en beneficio de la ciudadanía, es decir, parar construir los sustentos de la gobernanza.

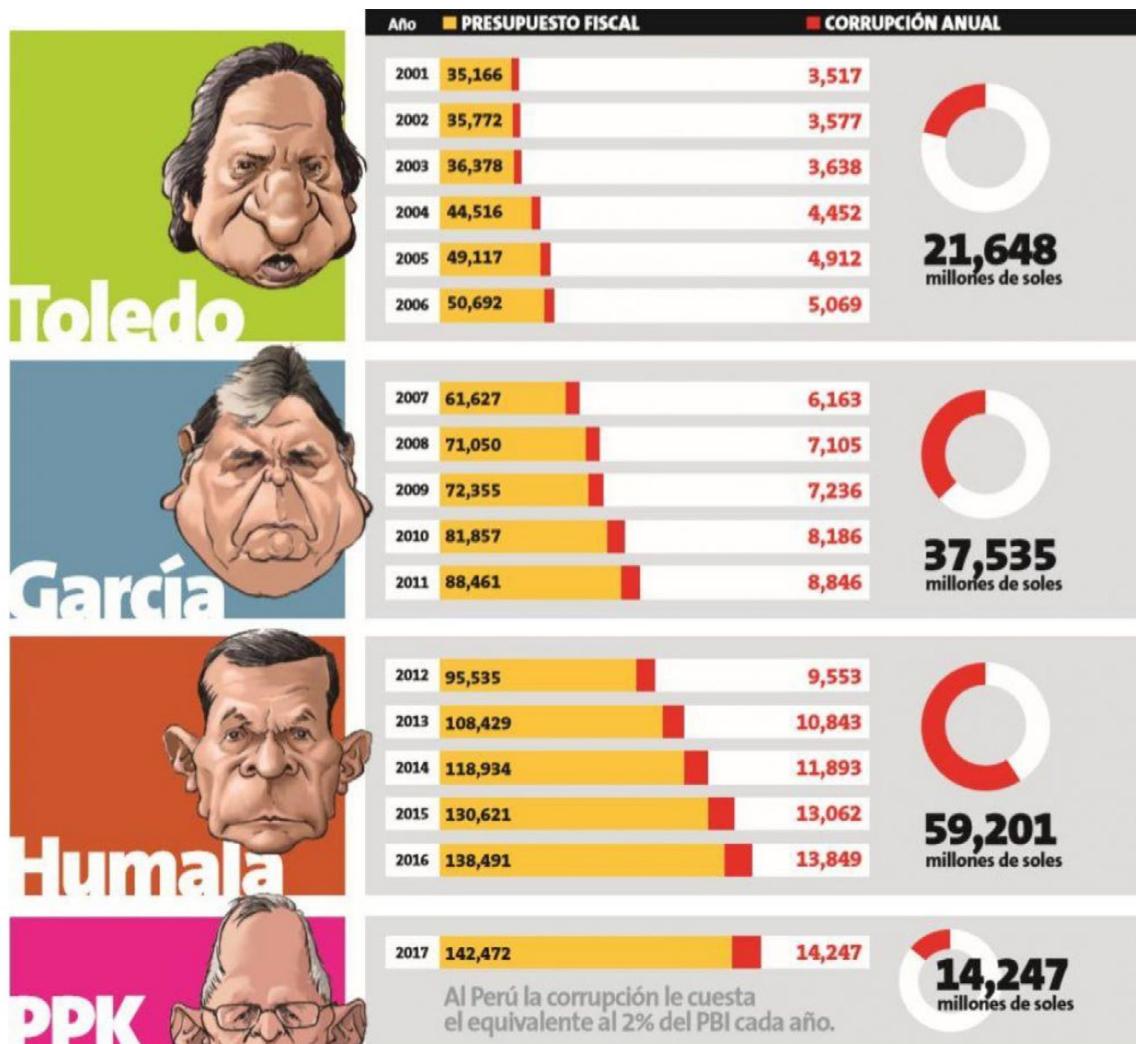
En la VIII Cumbre de las Américas, Martín Vizcarra, Presidente del Perú, señaló que la corrupción representa 2% del Producto Bruto Interno (PBI). El análisis de Contribuyentes por Respeto afirma que los últimos cuatro gobiernos, entre 2000 y 2018, la corrupción "le costó al Estado 136,147 millones de soles, lo que equivale a una cantidad cercana al presupuesto fiscal peruano de todo el año 2016", una pérdida diaria de 10 millones de dólares.

Hasta fines del 2016 se registraron 33,000 casos de corrupción. Las entidades más afectadas son las Municipalidades, los Gobiernos Regionales, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el Congreso y varios Ministerios. Es decir, el conjunto de los aparatos públicos que deben ejercer gobierno, dar leyes, proteger a la ciudadanía y administrar justicia. En síntesis, los organismos públicos sobre los que debería descansar la construcción y el fortalecimiento del buen gobierno. A ello hay que sumar los recientes cargos contra el núcleo más representativo del empresariado, comprometido profundamente con diversos actos de corrupción y lavado de dinero.

Según el estudio de Percepción de la Corrupción elaborado por la Organización para la Transparencia Internacional, en una escala de 0 a 100 (100 es nula), el Perú ocupa el puesto 101 de 176 naciones, que expresa una baja confianza ciudadana. Y es que la gente ha dejado de creer en sus autoridades y representantes simultáneamente a percibir que todos son corruptos o ingresan al gobierno "para robar".

En suma, es penoso señalar que la corrupción, presente en toda la vida republicana, pero últimamente más extendida y visualizada, constituye, por una parte, una traba a la pretensión de Perú de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), pero fundamentalmente para actuar con los parámetros de una nación con gobernabilidad democrática, visión de futuro en su desarrollo y un sistema político probo que sirva a la gente con calidad y calidez.

INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN CON LOS 5 ÚLTIMOS PRESIDENTES



Fuente: Periódico Perú 21, 22/04/2018



TURKEY

Turkey's unprecedented municipal elections

On March 31, 2019, Turkey held nation-wide municipal elections amid a severe economic crisis. The voter turnout was strong, and although the ruling Justice and Development Party (AKP) of President Recep Tayyip Erdoan enjoyed a notable advantage with control over the media and use of government resources, the party experienced a severe defeat. Opposition parties' candidates won the race in the several of the most important provinces that were previously ruled by AKP mayors, including Ankara and İstanbul. In the weeks that followed, there were exceptional developments that call into question the legality and the integrity of the election process and the independence of the Supreme Election Council.

Zeynep Baser

First, in four provinces in Turkey's predominantly Kurdish southeast, the Council deemed that the Peoples' Democratic Party (HDP) candidates that won the elections were ineligible to assume office due to their previous dismissal from public service by use of decree-laws under the now-defunct state of emergency. Instead, AKP candidates who had received the second highest number of votes were declared elected. Such decision was taken despite the fact the Council had validated the candidacy of HDP prior to the election. Subsequent appeals from HDP to the Council were rejected.

Second, after prolonged objection and appeal processes by the ruling AKP, on May 6 the Council annulled the results of mayoral election in İstanbul and revoked the mandate of the opposition Republican People's Party mayor elected. The Council cited irregularities in the appointment of officials at the ballot box committees as the reason for the annulment, yet did not annul other election results that took place under the mandate of the same committees, such as the elections for district mayors and council members, where the results favored AKP candidates. Conversely, in Bursa, where the AKP candidate won the election with similar irregularities, the Council rejected the appeals of the opposition for a rerun.

Judicial evaluations have determined that there has been a serious breach of law in the Council's decisions to rerun the elections in İstanbul. As a result, there is the widespread impression that the mayoral vote was cancelled because the results were unacceptable to the ruling party. The EU 2019 Turkey Progress Report has explicitly raised the concern about the respect of the legality and integrity of the electoral process and the Council's independence from political pressure ([European Commission, 2019](#), p. 6, para. 2). As well, Kati Piri, European parliament's Turkey rapporteur, has said that the Council's decisions "ends the credibility of democratic transition of power through elections" in the country ([The Guardian](#), 2019, para. 6).

AKP's reluctance to lose the control of İstanbul has a strategic and symbolic meaning. The city is the country's commercial and cultural capital, Erdoğan's hometown and base, and with its high trade volume, it has been a funding center for many AKP related networks. İstanbul had been governed by the AKP (and its predecessors) for the previous 25 years. Erdoğan himself has said, "if we lose İstanbul, we lose Turkey". The country is now awaiting the outcomes of the İstanbul mayoral election rerun to be held on June 23.

Opinión CORRUPTION

QUESTIONS FROM JGG | ANSWERS BY DIANA CHIGAS & CHEYANNE SCHARBATKE-CHURCH



Professor Diana Chigas



Professor Cheyanne Scharbatke-Church

BIO: Diana Chigas and Cheyanne Scharbatke-Church

Diana Chigas is Professor of the Practice of International Negotiation and Conflict Resolution and Cheyanne Scharbatke-Church is a Professor of the Practice of Aid Effectiveness, both at the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University. They co-direct the [Corruption, Justice, and Legitimacy Project](#), which seeks to advance innovative approaches to corruption analysis and programming in fragile and conflict-affected contexts. The Project curates the [Corruption in Fragile States blog](#).

Opinión

JGG: which are the three main challenges that developing countries and fragile and conflict-affected states (FCAS) face in order to improve anti-corruption efforts?

Diana Chigas and Cheyanne Scharbatke-Church:

The first challenge relates to how anti-corruption activists typically frame corruption as a moral problem—the result of “greed” and moral depravity. While this is sometimes true, anti-corruption policies based on this conception—such as awareness campaigns, professional training, oversight mechanisms—have largely not been effective. Corruption is a moral issue, but it is also a complex system that persists because it serves social, political and economic functions, both for “perpetrators” and “victims” who need to survive in the context of weak state institutions and insecurity.

The second challenge relates to the dominance of international models and interests over local understandings and approaches to anti-corruption. Many have questioned the relevance in FCAS of relying on “principals” to enforce anti-corruption policies. Yet this model dominates internationally-supported anti-corruption policy and practice; at the same time, the lived experience of people working in the local agencies is largely ignored. International partners are also often unwilling to address issues of political power and exclusion that corruption sustains.

Finally, the belief that “everybody does it” sustains corruption, making it difficult for individuals to behave with integrity if they do not trust that others will do the same. It is encouraging that in many countries—from Guatemala to Romania—people have taken to the streets in large numbers to protest corruption, with some significant successes. But these achievements are no guarantee of sustained reduction of corruption. Punishing the corrupt, removing leaders, or pressuring them to take action will not change the *system of corruption*. An anti-corruption reform coalition—i.e., sustained coordinated action by actors within and across the state, in the private sector and civil society—is needed to implement real reform.

JGG: It is very common associate corruption with low salaries, particularly within the police and public administration. Do you think there is comprehensive evidence in support of this hypothesis?

Diana Chigas and Cheyanne Scharbatke-Church:

There is evidence that low salaries and poverty are causes of corruption and that raising salaries can help to curtail corruption (See [Van Rijckeghem, C. & Weder, B., 2001](#)). However, this is neither sufficient nor very effective in contexts where robust monitoring is not possible or there is weak rule of law (See [Gans-Morse, J., et al., 2017](#)). Like “greed”, low salaries are one of many factors—including political dynamics, insecurity, lack of trust and social and other pressures from kin and colleagues—that drive corrupt behavior. These factors interact to cause corruption, sometimes in counter-intuitive ways, e.g., in some cases where raising salaries actually increased the amount of bribery (See [Foltz, J. & Opoku-Agyemang, K., 2015](#)).

JGG: It has been proved that a normative framework and social control mechanisms are not enough to deal with corruption. What are some good practices to improve the relevance and effectiveness of anti-corruption efforts?

Diana Chigas and Cheyanne Scharbatke-Church:

Evidence for anti-corruption “good practices” is not robust. Nonetheless, based on our research, we suggest the following:

- » Develop policies based on contextually-grounded systemic analysis of corruption that value local knowledge more. There is no an ideal anti-corruption framework.
- » Pay attention to the level, location and type of corruption. Different sectors, institutions and geographic regions have their own “rules of the game” and dynamics.
- » Address drivers as well as enablers of corruption. The vast majority of anti-corruption programs (especially those supported by international cooperation) address only enablers of corruption (factors that make it possible) and forget about the drivers (factors that motivate). These are likely necessary, but rarely sufficient to reduce corruption dynamics.
- » Align legal and social norms. If legislation criminalizes behavior that deviates too much from social norms, people will tend to ignore the law. Moderate laws are more likely to be enforced without great resistance and can catalyze a process that eventually allows for more stringent laws as social norms change.

Consultancies

JGG inició el monitoreo del Programa de Gobernanza Inclusiva y Derechos Humanos en Honduras.

En noviembre pasado JGG inició el monitoreo de tres proyectos financiados por *Global Affairs Canada* con un enfoque dual que atiende no solo a las mujeres sino a las personas LGBTI. Los proyectos buscan fortalecer la promoción, el monitoreo y el respeto de los derechos humanos de dicha población, a reducir la impunidad de los crímenes sexuales y de violencia de género cometidos en su contra y a mejorar su acceso a la justicia. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, *Justice Education Society* y Abogados sin Fronteras son las encargadas de su implementación. El monitoreo contribuirá a generar evidencia para entender de mejor manera las sinergias, los costos y los beneficios de implementar un enfoque dual.

JGG concluded a research study on best practices for learning from evaluations.

This past April, a team composed by Kimberly Inksater and José Miguel López concluded a research study to review best practices in learning from evaluation findings for Global Affairs Canada as part of their *Learning from Evaluation Initiative*.

The research study included document review and interviews with representatives of four governmental entities with development cooperation mandates (Australia, Netherlands, Sweden and the United States), one multilateral agency (Inter-American Development Bank) and one multinational not-for-profit organization (Oxfam Canada). The study provided actionable recommendations regarding approaches and products that should be adopted, considering staff capacity and their knowledge and learning needs.

A review of the Gender Equality Law of Vietnam.

A team led by JGG's executive director, Kimberly Inksater, is conducting an exhaustive review of the Gender Equality Law of Vietnam in terms of its compatibility with international human rights standards and the effectiveness of ten years of implementation across all government departments and provinces. The United Nations Population Fund and the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs of Vietnam

are overseeing the process. Data collection mainly included interviews with duty bearers at all levels of government and rights holders, including ethnic minority women, organizations promoting LGBTI rights and women with disabilities.



JGG and the working group for the pilot project in Mérida

JGG is supporting the Mexico-Canada Juvenile Justice Reform Cooperation Project.

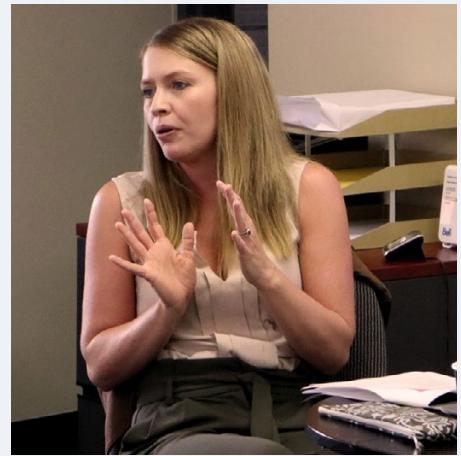
In 2017 JGG began advising Justice Canada on a juvenile justice reform project in Mexico. JGG has conducted research on the Mexican juvenile justice system, prepared needs assessments, facilitated consultations with Mexican public officials and supported the preparation of a post-detention reintegration pilot project based on international human rights and good practices. The pilot project will be implemented in the Mexican state of Yucatán and will be evaluated to further improve its design and eventual application in other states. (Add attached photo "PhotoMX")

JGG monitors the JUST project in Jamaica.

Since 2017, JGG has been a monitor and advisor to Global Affairs Canada and implementing partners (including Jamaica's Ministry of Justice, Canada's Justice Department and the United Nations Development Program) for the sector wide justice reform program called Justice Undertakings for Social Transformation. JGG provides advice related to performance measurement in the sector, programme and initiatives undertaken by implementing partners and supports reflection and implementation of best practices in justice sector reform, including access to justice and gender responsive criminal justice strategies. (No photo)

JGG Roundtables

JGG held its fourth roundtable event this June called "More than a punitive exercise - How to position feminist monitoring, evaluation and learning as a process to deepen social transformation?" Laura Haylock, Oxfam Canada's Manager of Program Impact enthusiastically discussed with attendees the role of feminist evaluation in social transformation as well as some challenges and innovative approaches in conducting feminist evaluations.



Guest speaker Laura Haylock



Participants sharing their experiences on feminist evaluation

New Co-Praxis

JGG has released its most recent issue of Co-Praxis "[Digital Citizen Participation for Good Governance](#)". This Co-Praxis reflects on concepts, enabling conditions, success factors and challenges of using digital technologies to promote the participation of citizens in government decision-making. This issue was developed with the support of interns from the University of Ottawa and Carleton University.

The cover of the Co-Praxis issue 'Digital Citizen Participation for Good Governance' is shown. It features the title 'CoPraxis' and 'Just governance group' at the top. Below the title, it says 'Digital Citizen Participation for Good Governance'. The page number '11' is at the bottom right.

Just Governance Group

Contact Information

Kimberly Inksater, Director: kj.inksater@justgovernancegroup.org

John Sharp, Manager: j.sharp@justgovernancegroup.org

Carmen Beatriz Ruiz (Bolivia): cb.ruiz@justgovernancegroup.org

Skype: JustGovernanceGroup

Tel: 613-729-5612

info@justgovernancegroup.org



justgovernancegroup.org